



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 10529-2006-PA/TC  
LIMA  
LITA NATALIA SÁNCHEZ  
CASTILLO

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

#### I. ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lita Natalia Sánchez Castillo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 353, su fecha 8 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos.

#### II. ANTECEDENTES

##### 1. Demanda

Con fecha 3 de diciembre de 2002 la recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se declare inaplicables y sin efecto legal el acuerdo del Pleno del CNM, adoptado en la sesión continuada de fechas 27 y 28 de agosto de 2002, y la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2002, mediante los cuales se dispone su no ratificación en el cargo de Juez Titular Especializada de Familia del Distrito Judicial de Lima. Alega que al haberse dejado sin efecto su nombramiento y cancelado su título sin que el CNM haya expresado los motivos de su decisión, se ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a permanecer en el cargo, a la dignidad y al honor. Más aún si, según afirma, se ha desempeñado en el cargo con honradez, probidad e imparcialidad, sin haber merecido nunca sanción alguna por parte del Órgano de Control Interno del Poder Judicial.

##### 2. Contestación de la demanda

Con fecha 4 de diciembre de 2003 el CNM contesta la demanda señalando que el proceso de evaluación y ratificación de la accionante se ha llevado a cabo de conformidad con el artículo 154º de la Constitución, sin ocasionar vulneración alguna a sus derechos fundamentales. En ese mismo sentido, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del CNM agrega que, en materia de evaluación y ratificación de jueces, las resoluciones emitidas por el CNM no requieren motivación y son irrevisables en sede judicial.



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

### 3. Resolución de primer grado

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de junio de 2004, declara infundada la demanda por considerar que no se ha producido vulneración de los derechos alegados por la demandante, toda vez que de conformidad con diversos pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional el proceso de ratificación constituye un voto de confianza y no un procedimiento sancionador; motivo por el cual el CNM no requiere motivar su decisión.

### 4. Resolución de segundo grado

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada, mediante resolución emitida en mayoría, por fundamentos similares.

## III. FUNDAMENTOS

### *Consideraciones previas*

1. Antes de dilucidar la controversia, el Tribunal Constitucional debe precisar que conforme a los fundamentos 6, 7 y 8 de la STC 3361-2004-AA/TC los criterios establecidos por este Colegiado con anterioridad a la publicación de dicha sentencia en el diario oficial *El Peruano* –esto es, con anterioridad al 31 de diciembre de 2005– constituyen una interpretación vinculante en todos los casos relacionados con los procesos de evaluación y ratificación de magistrados efectuados por el CNM y, por ende, los jueces deben aplicar la jurisprudencia de este Tribunal en los términos en que estuvo vigente, ya que hasta antes de la referida fecha de publicación la actuación del CNM tenía respaldo en la interpretación efectuada respecto de las facultades que a tal institución le correspondían en virtud del artículo 154°, inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

### *Precisión del petitorio de la demanda*

2. En el caso concreto la recurrente solicita que se declare inaplicables y sin efecto legal el Acuerdo del Pleno del CNM, adoptado en la sesión continuada de fechas 27 y 28 de agosto de 2002 y la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2002, mediante los cuales se dispone no ratificarla en el cargo de Juez Titular Especializada de Familia del Distrito Judicial de Lima y cancelar su título de nombramiento. Solicita, por consiguiente, su reposición en el cargo y el reconocimiento de todos los derechos que dejó de percibir como consecuencia de su no ratificación.
3. Alega que la Resolución mencionada no se encuentra debidamente motivada por lo que desconoce los motivos y las razones objetivas de la decisión de no ratificarla, y que ello constituye una afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a permanecer en el cargo, a la dignidad y al honor.





## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

### *Análisis constitucional del caso concreto*

4. En todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, será una decisión arbitraria y en consecuencia inconstitucional.
5. En el supuesto particular de los procedimientos de evaluación y ratificación de magistrados ante el CNM, si bien el ejercicio *per se* de tal atribución discrecional no vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando se ejerce de manera arbitraria, esto es cuando no se motivan debidamente las decisiones adoptadas y/o no se siguen los procedimientos legalmente establecidos para su adopción.
6. Sin embargo, en jurisprudencia uniforme y reiterada (cf. STC 1941-2002-AA/TC), este Tribunal ha establecido que no todo acto administrativo expedido al amparo de una potestad discrecional, siempre y en todos los casos, debe estar motivado. Es precisamente dicha situación en la que se encuentra la institución de las ratificaciones judiciales pues cuando fue introducida en la Carta de 1993 estuvo prevista como un mecanismo que únicamente expresaba el voto de confianza de la mayoría o la totalidad de miembros del CNM sobre la forma como se ejerce la función jurisdiccional.
7. Se dispuso de este modo que el establecimiento de un voto de confianza que se materializa a través de una decisión de conciencia por parte de los miembros del CNM, sobre la base de determinados criterios que no requieren ser motivados, no es una institución que se contraponga al Estado Constitucional de Derecho y a los valores que el Estado persigue promover.
8. En tal sentido si bien es cierto que con la emisión de la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2002, podría considerarse que se ha vulnerado el derecho al debido proceso –toda vez que dicha resolución adolece de falta de motivación respecto de las razones que hubiesen justificado la decisión de no ratificar a la demandante en el cargo de Juez Titular Especializada de Familia de Lima– en el fundamento 7 de la STC 3361-2004-AA/TC, este Tribunal ha señalado que

[...] en lo sucesivo, y conforme a lo que se establezca en el fallo de esta sentencia, los criterios asumidos en este caso deberán respetarse como precedente vinculante conforme al artículo VII del Título Preliminar del CPC, tanto en el ámbito judicial como también por el propio CNM. Es decir, en los futuros procedimientos de evaluación y ratificación, el



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CNM debe utilizar las nuevas reglas que se desarrollarán en la presente sentencia.

9. Para estos casos resulta entonces aplicable el *prospective overruling*, mecanismo mediante el cual todo cambio en la jurisprudencia no adquiere eficacia para el caso decidido sino para los hechos producidos con posterioridad al nuevo precedente establecido. En el caso de autos, la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2002, fue publicada en el diario oficial *El Peruano* el 29 de agosto del mismo año; es decir, antes de la emisión de la sentencia que configura el nuevo precedente, razón por la cual la demanda de autos no puede ser estimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

### HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI  
GARCÍA TOMA  
VERGARA GOTELLI

Lo que certifico

Dr. Daniel Figallo Rivas  
SECRETARIO RELATIVO